RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-701/2015

RECORRENTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA.

SECRETARIO: CARLOS EDUARDO PINACHO CANDELARIA Y NANCY CORREA ALFARO

México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de reconsideración **SUP-REC-701/2015** interpuesto por el Partido Acción Nacional contra la sentencia de diez de septiembre de dos mil quince, pronunciada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, en el juicio de revisión constitucional número SM-JRC-182/2015, que confirmó los resultados de la elección en el ayuntamiento de Iturbide, Nuevo León; y,

RESULTANDO:

I. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral local. El siete de octubre de dos mil catorce, inició el proceso electoral local 2014-2015 en Nuevo León, para elegir Gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos.

2. Jornada electoral. El siete de junio del año en curso, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, a los miembros del Ayuntamiento de Iturbide, Nuevo León.

3. Cómputo de la Comisión Municipal Electoral de Iturbide, Nuevo León. El diez de junio en las instalaciones de la Comisión Municipal se realizó la sesión de cómputo de la elección de presidente municipal de Iturbide, la cual arrojó los siguientes resultados¹:

PARTIDO	PAN	PRI	NA	VOTOS NULOS
Votos	1,156	1,305	11	43

En consecuencia, se declaró la validez de la elección y se entregaron las constancias de mayoría a la planilla que postuló el Partido Revolucionario Institucional.

4. Juicio de inconformidad. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario ante la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, promovió juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado a fin de impugnar los resultados

¹Véase acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación del municipio de Iturbide, Nuevo León que se encuentra en el cuaderno accesorio único.

de las actas de cómputo total relativas al municipio de Iturbide, Nuevo León, la declaración de validez de esa elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

El nueve de julio del año en curso, el referido órgano jurisdiccional resolvió el juicio de inconformidad, en el que declaró infundados los conceptos de nulidad aducidos por el inconforme y, en consecuencia, confirmó la validez de la votación recibida en las casillas impugnadas.

5. Juicio de revisión constitucional electoral. Contra la determinación anterior, el Partido Acción Nacional presentó demanda de juicio de revisión constitucional electoral, el cual quedó radicado ante la Sala Regional Monterrey bajo el número de expediente **SM-JRC-182/2015**.

6. Sentencia impugnada. El diez de septiembre del año en curso, la Sala Regional referida resolvió el medio de impugnación en el sentido de confirmar la sentencia del Tribunal Electoral local.

II. Recurso de reconsideración. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil quince, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de reconsideración contra la sentencia citada en el punto que precede.

III. Remisión del expediente. El trece de septiembre de dos mil quince, la Sala Regional Monterrey remitió el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la presentación del medio de impugnación de mérito.

IV. Turno a ponencia. Por acuerdo de trece de septiembre del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala Superior tuvo por recibido el recurso de reconsideración, ordenó formar el expediente **SUP-REC-701/2015** y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 60, párrafo tercero, y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4, 64 y 68, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto contra la sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, en un juicio de revisión constitucional electoral.

SEGUNDO. Improcedencia. La Sala Superior considera improcedente el presente medio de impugnación, por lo que la consecuencia es el desechamiento de plano, en conformidad con los artículos 9, párrafo 3, 61, párrafo 1, inciso b), y 62 párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la referida ley procesal electoral, porque no se actualiza alguna de las condiciones especiales de procedibilidad del recurso de reconsideración vinculadas al análisis de constitucionalidad o convencionalidad de alguna norma jurídica, así como incidencia de la

interpretación constitucional en el estudio de fondo, en tanto, éste versó sobre la legalidad de la sentencia local impugnada.

Esto es así, porque las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales pueden ser impugnadas a través del recurso de reconsideración, cuando: **1.** Se trate de juicios de inconformidad, o **2.** En los demás medios de impugnación de su competencia, siempre que hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

Este último supuesto ha sido ampliado por la Sala Superior derivado de la interpretación a las referidas disposiciones legales, lo que ha dado lugar a permitir la procedencia del recurso en los casos en que las Salas Regionales:

- Expresa o implícitamente inapliquen leyes electorales, normas partidistas o normas consuetudinarias de carácter electoral, por considerarlas contrarias a la Constitución.²
- Omitan el estudio o se declaren inoperantes los conceptos de agravio relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales.³

² Jurisprudencia 32/2009, de rubro: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE SI EN LA SENTENCIA LA SALA REGIONAL INAPLICA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, UNA LEY ELECTORAL POR CONSIDERARLA INCONSTITUCIONAL", consultable en la *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, 2010, pp. 46 a 48. Jurisprudencias 17/2012 y 19/2012 de rubros: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS" y "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO INAPLIQUEN NORMAS CONSUEUDINARIAS DE CARÁCTER ELECTORAL", publicadas en la *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 5, número 10, 2012, pp. 30-34.

³ Jurisprudencia 10/2011, de rubro: "RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO SE OMITIÓ EL ESTUDIO O SE DECLARAN

SUP-REC-701/2015

- Inapliquen la normativa estatutaria en contravención al principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos.⁴
- Declaren infundados los planteamientos de inconstitucionalidad.⁵
- Realicen un pronunciamiento expreso o implícito sobre la constitucionalidad de una norma electoral o la interpretación de un precepto constitucional que orienta la aplicación o no de normas secundarias.⁶
- Hayan ejercido control de convencionalidad.⁷
- No hayan atendido un planteamiento que se vincule a la indebida interpretación de leyes por contravenir bases y principios previstos en la Constitución.⁸
- La existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas, que atenten contra los principios o preceptos constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, respecto de las cuales las salas regionales no hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar su observancia o hayan omitido su análisis.⁹

INOPERANTES LOS AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ELECTORALES”, consultable en la *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, pp. 38 y 39.

⁴ Véase el recurso de reconsideración SUP-REC-35/2012 y acumulados.

⁵ Véase ejecutoria del recurso de reconsideración SUP-REC-57/2012 y acumulado.

⁶ Véase el recurso de reconsideración SUP-REC-180/2012 y acumulados.

⁷ Jurisprudencia 28/2013, de rubro: “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA CONTROVERTIR SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO EJERZAN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD”, publicada en *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, número 13, 2013, pp. 67 y 68.

⁸ Criterio sostenido por este Tribunal al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-253/2012 y acumulado.

⁹ Jurisprudencia 5/2014, de rubro: “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES”, publicada en *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 14, 2014, pp. 25 y 26.

En la especie, el recurrente estima que contrario a lo sostenido por la Sala responsable, el hecho de que el tesorero municipal fungiera como representante general del Partido Revolucionario Institucional en las pasadas elecciones para renovar el ayuntamiento de Iturbide en Nuevo León, genera la presunción de que el servidor público estuvo presente en la totalidad de las casillas instaladas, porque la normatividad aplicable prevé la posibilidad de que los representantes generales puedan entrar a los centros de votación.

Asimismo, considera que la resolución impugnada no es exhaustiva porque dejó de tomar en cuenta todos los argumentos vertidos en su demanda, además de que tampoco desarrolló una debida fundamentación y motivación, en virtud de que no valoró aspectos relativos a la realidad social y política del municipio de Iturbide.

En la sentencia recaída al expediente **SM-JRC-182/2015**, la Sala Regional Monterrey se pronunció en torno a los agravios formulados por el partido político actor contra la resolución del tribunal local, de acuerdo a lo siguiente:

a) Respecto a que si el Tribunal Electoral local debía tomar en cuenta lo previsto en el artículo 126, segundo párrafo, de la Ley Electoral Local, relativo a la prohibición de que los militantes de un partido político actúen como funcionarios de las mesas directivas de casillas, resolvió que el tribunal local en forma ajustada a Derecho analizó el juicio de inconformidad a la luz de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que en el

SUP-REC-701/2015

municipio de Iturbide se instalaron casillas únicas, lo cual obliga a que, de acuerdo con el artículo 253, párrafo 1, de la ley general referida, la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casillas únicas se realice con base en esas disposiciones.

También, determinó que conforme a las disposiciones que le son aplicables por haber celebrado elecciones concurrentes a la federal, no hay una prohibición a los militantes partidistas para participar como funcionarios de casilla; por lo que la Sala Regional confirmó que el tribunal local desestimara como causa de nulidad que militantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional hubieran actuado como funcionarios en las mesas directivas respectivas.

b) En torno a que si el Tribunal Electoral local debía considerar que la presencia de empleados públicos, que no son de mando superior, genera la presunción de presión en los electores y funcionarios de casilla; la Sala responsable sostuvo que la sola presencia de un servidor público como funcionario de casilla no genera presión en el electorado, ya que es necesario se acrediten otras circunstancias, tales como que el funcionario ejerza un cargo de confianza con mando superior.

Así, señaló que constaba en autos que un auxiliar administrativo en el ayuntamiento había actuado como presidente en la casilla **832B**; que el chofer, también adscrito al ayuntamiento, fungió como primer escrutador en la casilla **832B**; y, que otra auxiliar administrativo en la tesorería municipal actuó como presidenta en la casilla **832C1**.

Por lo que, estableció que la presencia de estos servidores públicos de mando inferior no genera la presunción de presión y, que en todo caso, le correspondía al promovente comprobar tales circunstancias.

Esto, aunado a que en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de esas casillas no se había asentado incidente o escrito de protesta en ese sentido, siendo que habían estado presentes los representantes del Partido Acción Nacional –ahora recurrente.

c) Referente al disenso vertido en el sentido de que el Tribunal Electoral local inadvirtió el hecho de que el representante general fuera una autoridad de mando superior era suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas que se instalaron en Iturbide, Nuevo León; la Sala Regional determinó que en el caso concreto no estaba probado que el funcionario estuviera presente en las mesas directivas que se instalaron para la elección que se impugnó.

Razonó que estaba acreditado que Francisco Peñaflor de la Rosa laboraba como tesorero municipal en el aludido ayuntamiento y que tenía funciones de mando; además, que había sido designado como representante general del Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, destacó que de las hojas de incidentes que obraban en autos no se había demostrado ninguna circunstancia referente a que el representante hubiera hecho acto de presencia en alguna de las casillas instaladas.

SUP-REC-701/2015

Asimismo, resaltó que no obstante existía un escrito de protesta de la casilla **834B** levantada por el representante del Partido Acción Nacional referente a que el representante general del Partido Revolucionario Institucional tomó una boleta nula sin tener facultades para tocar el material electoral; se trataba de un hecho aislado que demostraba que sólo estuvo presente durante el cómputo de una casilla y no necesariamente durante la votación.

Entonces, concluyó que no estaba demostrada fehacientemente la presencia del tesorero en las casillas instaladas.

d) Por último, analizó si la presencia del hermano del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal en la casilla **832C1** generó falta de certeza en los resultados obtenidos; a lo cual señaló que no hay una prohibición en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en la jurisprudencia vigente del Tribunal Electoral para que los familiares de los servidores públicos puedan fungir como funcionarios de casilla, por lo que considera que esa circunstancia era insuficiente para acreditar que se ejerció presión en el electorado.

Aunado a ello, puntualizó que el partido tampoco acreditó que hubiera existido presión a los electores o funcionarios de casilla.

Finalmente, refirió que era improcedente analizar la hipótesis de nulidad de elección relativa a que el veinte por ciento de las casillas hubieran sido anuladas, porque no se había anulado alguna en el caso concreto.

De manera que, aun cuando se trata de una sentencia de fondo, el estudio realizado por la Sala Regional se circunscribió, exclusivamente, a verificar la legalidad de la sentencia combatida a la luz de los argumentos planteados por el partido promovente.

De ahí que el análisis llevado a cabo ningún ejercicio de control de constitucionalidad o convencionalidad se llevó a cabo y, éste tampoco se hace valer en el presente asunto.

Derivado de lo que antecede, con independencia del sentido de la decisión asumida por la Sala Regional, lo cierto es que los planteamientos que conformaron las impugnaciones versaron sobre un tema de legalidad, vinculado a la pretensión de demostrar las irregularidades alegadas por el actor, contra de lo cual es improcedente el recurso de reconsideración, en tanto que las sentencias que emiten las Salas Regionales, por regla general, son definitivas e inatacables, según lo prevé el artículo 25 de la ley procesal federal.

Cabe precisar que resulta jurídicamente inviable que esta instancia que el recurrente intente crear de manera artificiosa argumentos para que proceda el recurso de reconsideración, al incluir razonamientos para aparentar que se reúnen los requisitos especiales de procedibilidad, cuando en realidad los conceptos de agravio expresados únicamente se aducen cuestiones de legalidad, en razón de que ello contraviene la naturaleza excepcional del recurso de reconsideración.

En consecuencia, al haberse evidenciado que no se actualiza alguna de las excepciones legales y jurisprudenciales para la procedencia del recurso de reconsideración, lo conducente es desechar de plano de la demanda.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se **desecha** de plano la demanda.

NOTIFÍQUESE personalmente al recurrente por conducto del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León; **por correo electrónico** al referido tribunal local, así como a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León; y, por **estrados** a los demás interesados; con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29, y 70, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvase las constancias atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADA

**MARÍA DEL CARMEN
ALANIS FIGUEROA**

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

**MANUEL GONZÁLEZ
OROPEZA**

MAGISTRADO

**SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR**

MAGISTRADO

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO